CHILE: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS 2015

RESUMEN

Note: This report was updated 4/19/16; see Appendix F: Errata for more information:

<http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper>

Chile es una democracia Constitucional multipartidista. En 2013, la ciudadanía eligió a Michelle Bachelet como presidenta, en elecciones que los observadores consideraron libres e imparciales. La presidenta Bachelet asumió el cargo en marzo de 2014. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.

Los principales problemas en el ámbito de los derechos humanos fueron la dureza de las condiciones en las prisiones; la violencia y la discriminación contra mujeres, niños, personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); y el conflicto social y la discriminación de las poblaciones indígenas.

Otras inquietudes relacionadas con los derechos humanos fueron las denuncias acerca del uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad.

El gobierno tomó medidas para investigar y procesar a los funcionarios que cometieron abusos. No obstante, muchas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la entidad del Estado a cargo de supervisar y vigilar los derechos humanos, señalaron que fueron poco frecuentes las condenas de los oficiales de seguridad acusados de cometer abusos.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

No hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran homicidios arbitrarios ni extrajudiciales.

Según el Ministerio del Interior, hasta julio, 1.149 exmilitares y exoficiales de las fuerzas del orden habían sido acusados o condenados de complicidad en los

asesinatos o las desapariciones durante los años del gobierno de Pinochet (1973-1990).

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

En julio, ocho excarabineros y miembros de patrullas del ejército fueron acusados formalmente de secuestro con agravantes por su supuesta participación en la desaparición del ciudadano estadounidense Boris Weisfeiler en 1985. El caso estaba pendiente al finalizar el año, y los imputados seguían en libertad bajo fianza.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Aun cuando la Constitución y las leyes prohíben estas prácticas, se recibieron denuncias de fuerza excesiva, abusos y trato degradante a manos de las fuerzas del orden, incluyendo a la policía nacional uniformada (Carabineros), la Policía de Investigaciones (PDI) y los gendarmes penitenciarios (Gendarmería).

El 21 de mayo, el estudiante universitario Rodrigo Avilés sufrió una herida grave en la cabeza al ser alcanzado por el chorro de un carro lanzagua durante una manifestación estudiantil, y permaneció hospitalizado dos meses. Al principio, el gobierno negó que la fuerza excesiva hubiera sido un factor causante de la herida; sin embargo, la televisión nacional mostró videos en los que se veía al joven en el momento de ser golpeado por el chorro de agua controlado por un carabinero. El oficial Manuel Noya fue despedido y declaró que la lesión fue accidental.

El 14 de octubre, el Tribunal Penal de Copiapó declaró al sargento de Carabineros Cristián Opazo culpable de “apremios ilegítimos” (trato ilegítimo) por golpear violentamente a cuatro jóvenes detenidos al margen de las manifestaciones sociales de Freirina en 2012. El sargento fue condenado a tres años de prisión, pero la sentencia fue suspendida.

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Las condiciones carcelarias fueron duras. Las organizaciones de derechos humanos informaron que hubo actos de violencia, incluida la tortura. También fue común la violencia entre los reclusos.

Condiciones físicas: Hubo hacinamiento en las prisiones. El gobierno informó que, al 31 de octubre, había 43.161 presos en centros penitenciarios diseñados para albergar a 41.594 reclusos. Muchas prisiones eran anticuadas; las condiciones sanitarias en ellas, deficientes, y la alimentación y los servicios médicos, insuficientes. En algunas prisiones, la calefacción inadecuada siguió siendo un problema grave; asimismo, la iluminación y la ventilación insuficientes afectaron a los reclusos. El gobierno informó que el acceso a agua potable fue limitado en varias prisiones.

Las autoridades informaron que 90 presos murieron durante el año: la violencia entre los reclusos causó 41 de esas muertes; 10 reclusos se suicidaron y 39 murieron de causas naturales.

Administración: Por lo general, autoridades independientes investigaron las denuncias fiables y documentaron los resultados de manera que fueran accesibles al público. El gobierno investigó y vigiló habitualmente las condiciones de las prisiones y los centros de detención.

Vigilancia independiente: El gobierno permitió las visitas de observadores independientes de los derechos humanos a las prisiones, las cuales se llevaron a cabo tanto en las instalaciones administradas por el gobierno como en las instalaciones privadas. Grupos de presos y de derechos humanos continuaron investigando supuestos casos de maltrato o de fuerza excesiva contra los detenidos, y los medios de información dieron a conocer algunos de ellos.

Mejoras: En coordinación con la división de derechos humanos de Gendarmería, el gobierno capacitó y nombró a monitores de derechos humanos para cada prisión con el fin de organizar talleres sobre derechos humanos y mejores prácticas. Además de ofrecer capacitación formal, los monitores tuvieron la responsabilidad de verificar que se respetaran los derechos de los prisioneros en todos los procesos.

En varias prisiones, se separó a los reclusos LGBTI de la población general para evitar posibles agresiones. Gendarmería llevó adelante la implementación del acuerdo firmado con la organización no gubernamental (ONG) Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que creó un programa de capacitación para Gendarmería destinado a favorecer el trato justo de los reclusos LGBTI y lograr su integración en la población general de la prisión.

De acuerdo con el análisis de una encuesta sobre el sistema penitenciario realizada por el gobierno en 2014, la Unidad de protección y promoción de los derechos

humanos de Gendarmería estableció una subdivisión para vigilar el avance en la solución de deficiencias, entre otras, el hacinamiento, el control de la temperatura, el acceso a los teléfonos y el trato que se da a los visitantes.

d. Arresto o detención arbitrarias

La Constitución prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y, en general, el gobierno respetó estas prohibiciones.

Función de la policía y del aparato de seguridad

Los Carabineros y la PDI tienen la responsabilidad legal de aplicar la ley y mantener el orden, así como de hacer cumplir las leyes migratorias y fronterizas en el país. El Ministerio del Interior supervisa ambas fuerzas. El INDH vigila las denuncias y las acusaciones de abusos.

En general, las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre Carabineros y la PDI, y el gobierno cuenta con mecanismos para investigar y castigar los abusos y la corrupción. El sistema de justicia militar investiga los supuestos abusos cometidos por Carabineros, mientras que el sistema de justicia penal investiga las acusaciones de abusos cometidos por oficiales de la PDI. En su informe anual de 2013, el INDH indicó que, en 2012, hubo 1.775 denuncias contra los Carabineros por “violencia innecesaria”; sin embargo, menos del 2% de estas dio lugar a condenas en el sistema de justicia militar. El informe señaló que, los Carabineros condenados por hacer uso de “violencia innecesaria” a menudo fueron reasignados a otros puestos dentro del organismo. Human Rights Watch expresó inquietud acerca de que los tribunales militares no eran totalmente independientes.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

Solo los funcionarios públicos expresamente autorizados por la ley pueden arrestar o detener a los ciudadanos y, por lo general, lo hicieron de manera abierta con órdenes basadas en pruebas suficientes presentadas ante una judicatura independiente. Las autoridades deben informar inmediatamente a un fiscal de cualquier detención y, en general, así lo hicieron.

El fiscal debe iniciar una investigación, tomar la declaración al detenido y comprobar que este permanezca en una comisaría de policía local hasta la audiencia de control de detención. Estas audiencias se llevan a cabo dos veces al

día, lo que facilita tomar una decisión judicial sobre la legalidad de la detención en un plazo de 24 horas después del arresto. Se debe informar a los detenidos de sus derechos, incluido el derecho a un abogado y a guardar silencio hasta que el abogado esté presente. A los detenidos que no pueden contratar su propio abogado, se les asigna un defensor público. Las autoridades deben notificar la detención con prontitud a los familiares. Si las autoridades no informan a los detenidos de sus derechos en el momento del arresto, el juez puede declarar el proceso ilícito durante la audiencia de control de la detención.

La ley permite a los jueces fijar fianzas, conceder libertad provisional u ordenar que continúe la detención según sea necesario para la investigación o la protección del prisionero o del público.

Asimismo, la ley concede a los detenidos 30 minutos de acceso inmediato a un abogado (en presencia de un gendarme penitenciario), posteriormente acceso diario, y a un médico para que verifique su estado físico. Se permiten las visitas periódicas de familiares.

e. Denegación de juicio público imparcial

La Constitución establece una judicatura independiente y, en general, el gobierno respetó la independencia judicial.

Procedimientos judiciales

La Constitución y las leyes estipulan el derecho a un juicio imparcial y, en general, la judicatura independiente hizo cumplir este derecho.

Los acusados gozan de la presunción de inocencia y del derecho de apelación, así como del derecho a ser informados con prontitud de los cargos en su contra, a tener tiempo para preparar su defensa y a no ser obligados a declarar. Los fiscales nacionales y regionales investigan los delitos, formulan cargos y entablan acciones judiciales. Los tribunales de primera instancia están integrados por paneles de tres jueces. El proceso es oral y acusatorio; los juicios son públicos; los acusados tienen derecho a estar presentes y a consultar con un abogado de manera oportuna, y los jueces deciden la culpabilidad y dictan sentencia. Los acusados no gozan del derecho a un juicio por jurado. Por lo general, el público tuvo acceso a los registros del tribunal, así como a sus decisiones y conclusiones.

La ley establece el derecho a asesoramiento jurídico, y las defensorías penales públicas de todo el país ofrecieron este asesoramiento a quien lo solicitó. Cuando las organizaciones de derechos humanos o los parientes de los detenidos lo solicitaron, la ONG Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo y otros abogados que trabajan pro bono asistieron a los detenidos durante los interrogatorios y el juicio. Los acusados pueden confrontar o interrogar a los testigos en su contra, y presentar testigos y pruebas a su favor, aunque la ley prevé la presentación de testigos protegidos en ciertas circunstancias. Los acusados y sus abogados tienen generalmente acceso a las pruebas pertinentes a sus casos que tenga la fiscalía.

El procedimiento penal es inquisitivo en lugar de acusatorio para los delitos cometidos antes de que entraran en vigor las reformas judiciales de 2005. Al finalizar el año, un tribunal penal inquisitivo seguía abierto, y los juicios en este tuvieron períodos de espera prolongados.

Presos y detenidos políticos

No hubo denuncias acerca de detenidos o presos políticos, aunque algunos indígenas mapuches condenados por delitos penales afirmaron ser presos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Existe una judicatura independiente e imparcial para asuntos civiles, la cual permite a las personas buscar recursos civiles en los casos de violaciones de los derechos humanos; sin embargo, los procedimientos que conserva el sistema de justicia civil eran anticuados e ineficaces. La duración aproximada de un juicio civil promedio fue de cinco años, y las demandas civiles podían prolongarse por decenios. Se cuenta con recursos administrativos y judiciales para agravios supuestos. Los casos de violaciones de los derechos humanos de una persona pueden presentarse por medio de las peticiones de personas u organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual a su vez puede presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte podrá ordenar recursos civiles, incluida una compensación justa para la persona agraviada.

El 2 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del gobierno en una demanda presentada por un grupo de 12 ex oficiales militares que fueron torturados y recibieron una baja deshonrosa durante el gobierno de Pinochet, debido a que se opusieron al golpe militar. La corte ordenó al gobierno

pagar 217 millones de pesos (US \$310.000) en reparaciones para ser divididas entre los oficiales o sus parientes supervivientes. También dispuso que el gobierno debe honrar a los demandantes en una ceremonia pública. El gobierno indicó que cumpliría la decisión.

f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La Constitución prohíbe tales acciones y, en general, el gobierno respetó estas prohibiciones.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión y de prensa

La Constitución estipula la libertad de expresión y de prensa y, por lo general, el gobierno respetó estos derechos. La combinación de una prensa independiente, una judicatura eficaz y un sistema político democrático en pleno funcionamiento promovieron la libertad de expresión y de prensa.

Libertad de prensa y de medios de comunicación: Los medios de comunicación independientes se desempeñaron activamente y expresaron sin restricción una amplia variedad de opiniones; sin embargo, los informes publicados por Freedom House y Reporteros Sin Fronteras en 2013 manifestaron inquietud por la concentración de estos medios y la distribución no reglamentada de propaganda financiada por el gobierno. La mayor parte de los medios de comunicación, entre ellos el 95% de los medios impresos, estuvo en manos de dos grandes empresas familiares, Copesa y El Mercurio. No existe un marco jurídico que garantice a los distintos medios de difusión la distribución justa de las frecuencias.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no impuso restricciones ni impidió el acceso a internet y tampoco censuró el contenido publicado en línea. No hubo informes creíbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones electrónicas privadas sin la debida autorización judicial. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cerca del 72% de los hogares tenía acceso a internet.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno no impuso restricciones a la libertad académica ni a los actos culturales.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

La ley establece las libertades de reunión y de asociación y, en general, el gobierno respetó estos derechos.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (*International Religious Freedom Report*) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridos

La Constitución permite la libertad de circulación dentro del país, los viajes al exterior, la emigración y la repatriación y, en general, el gobierno respetó estos derechos.

El gobierno cooperó con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los desplazados internos, refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas o demás personas de interés.

Protección de los refugiados

Acceso al asilo: La ley establece la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno estableció un sistema para ofrecer protección a los refugiados, incluido el acceso a la educación y la atención a la salud. Hubo menos de 2.000 personas en el país reconocidas por el gobierno como refugiadas.

Sección 3. Libertad de participación en el proceso político

La ley confiere a los ciudadanos la capacidad para elegir a su gobierno por medio de elecciones periódicas, libres e imparciales basadas en el sufragio universal e igual, y los ciudadanos ejercieron esa capacidad.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: En diciembre de 2013, Michelle Bachelet fue elegida presidenta en elecciones libres e imparciales. En noviembre de 2013, en elecciones también consideradas libres e imparciales, los votantes eligieron a 20 de 38 senadores y a todos los integrantes de la Cámara de Diputados. En 2013, también se eligieron consejeros regionales en todo el país por primera vez. Los funcionarios recién electos asumieron su cargo en marzo de 2014.

Participación de la mujer y de las minorías: Las mujeres ocuparon 19 de los 120 escaños de la Cámara de Diputados y 6 de los 38 del Senado. De los 23 miembros del gabinete, 8 fueron mujeres. Durante el año, como parte de una gran reforma del proceso electoral, la legislatura aprobó una ley para dar mayor paridad de género a los funcionarios electos exigiendo a los partidos políticos que al menos el 40% de los candidatos que se presenten para los cargos públicos sean mujeres.

Personas autoidentificadas como indígenas fueron elegidas para cargos públicos a nivel municipal; sin embargo, esto no sucedió a nivel nacional, debido en parte a barreras institucionales y culturales.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley dispone sanciones penales en los casos de funcionarios corruptos y, en términos generales, el gobierno aplicó esas leyes eficazmente, aunque hubo funcionarios que, en ocasiones, recurrieron a prácticas corruptas con impunidad. Durante el año, hubo informes aislados de corrupción gubernamental.

Corrupción: En el año, el Ministerio Público abrió una investigación contra el Grupo Penta, una gran sociedad de servicios financieros. Se presume que Penta financió ilícitamente campañas electorales de políticos pertenecientes a un partido de la oposición, la Unión Demócrata Independiente, y evadió impuestos declarando las donaciones a las campañas como gastos de la empresa. Al finalizar el año, cuatro ejecutivos de Penta habían sido acusados de fraude fiscal, soborno y lavado de dinero, y estaban bajo arresto domiciliario en espera de juicio. Soquimich (SQM), una empresa productora de litio, también fue investigada durante el año por su presunta participación en prácticas similares ya que, supuestamente, SQM realizó pagos ilícitos a candidatos de todo el espectro político. En febrero, la fiscalía abrió una investigación que involucraba al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, en un posible ejercicio de influencia indebida durante su participación en una transacción inmobiliaria de la empresa de su esposa. Los fiscales también

investigaron al senador Jaime Orpis por supuestamente aceptar dinero a cambio de su voto en una ley controversial sobre cuotas pesqueras.

El 23 de febrero, la presidenta anunció la creación de una comisión presidencial contra la corrupción y los conflictos de interés y, en abril, envió al Congreso proyectos de ley para fortalecer la ética y las leyes sobre el financiamiento de las campañas electorales. La primera de estas leyes fue aprobada en noviembre. También en noviembre, la comisión dio a conocer un informe que recomendaba 236 medidas contra la corrupción, y la presidenta participó en la inauguración de una nueva ONG, Observatorio Anticorrupción, para vigilar la implementación de esas medidas.

Divulgación de información financiera: Existe una regulación que obliga a los funcionarios públicos a divulgar su situación económica. La ley exige que todas las declaraciones se den a conocer al público y establece sanciones por incumplimiento; sin embargo, no ordena a ninguna unidad vigilar tales declaraciones.

Acceso público a información: La constitución exige que el gobierno y sus entidades hagan pública toda la información no clasificada acerca de sus actividades. El gobierno concedió a ciudadanos, no ciudadanos y medios de comunicación extranjeros el acceso a toda la información no clasificada. La ley regula la transparencia gubernamental, dispone el acceso del público a la información y se aplica a los ministerios; gobiernos regionales, provinciales y municipales; las Fuerzas Armadas, la policía y las fuerzas de seguridad pública; y a las empresas públicas en las que el Estado tiene una participación accionaria superior al 50% o la mayoría de los nombramientos en la junta directiva. La ley también enumera cinco excepciones en lo que se refiere a la confidencialidad. Se debe dar respuesta a cualquier solicitud de información en un plazo de 20 días hábiles, y la presentación de la solicitud es sin costo alguno. En los casos de incumplimiento, el director de la organización recibe una multa que va del 20% al 50% de su sueldo mensual. El Consejo para la Transparencia, una institución autónoma, establece el derecho de acceso a la información y decide los casos en los que se deniega esa información.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos pudieron operar generalmente sin restricciones del gobierno e investigaron y publicaron sus

resultados sobre casos relacionados con los derechos humanos. En general, las autoridades gubernamentales colaboraron y respondieron a sus puntos de vista, aunque algunos grupos de derechos indígenas afirmaron que sus opiniones no fueron tomadas en cuenta.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: El INDH desempeñó sus funciones independientemente del gobierno, emitió declaraciones públicas y propuso cambios a entidades o políticas gubernamentales para promover y proteger los derechos humanos. El informe anual del INDH de 2014 señaló varios problemas de derechos humanos, entre otros, el acceso limitado a la justicia; el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas del orden; la violencia contra mujeres y niños; los abusos sociales contra jóvenes, inmigrantes, personas transgénero y otras minorías, y la aplicación persistente de la ley antiterrorista de la época de Pinochet, incluso en los casos que implican a miembros de las comunidades indígenas.

El Senado y la Cámara de Diputados cuentan con comisiones permanentes de derechos humanos responsables de formular leyes sobre derechos humanos.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución establece que todas las personas son iguales en el ámbito de la ley y la dignidad; sin embargo, no señala específicamente a los grupos que reciben protección frente a la discriminación. La ley antidiscriminación de 2012 dispone de recursos jurídicos civiles para las víctimas de discriminación por motivos de raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, afiliación o no afiliación a organizaciones sindicales, o bien participación o no participación en esas organizaciones, sexo, orientación sexual, identificación de género, estado civil, edad, afiliación, aspecto personal y enfermedad o discapacidad física. La ley también impone sanciones penales más severas en los casos de actos de violencia por motivos de discriminación.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley tipifica como delito la violación, incluida la violación conyugal. Se imponen penas de 5 a 15 años de prisión por violación y, por lo general, el gobierno hizo cumplir la ley cuando se presentaron denuncias de este delito. No hubo indicaciones de renuencia policial ni judicial a actuar en esos casos. La ley penaliza la violencia doméstica física y psicológica y protege la privacidad y la seguridad de la víctima que presenta cargos de violación o

violencia doméstica. No obstante, los expertos opinaron que muchos casos de violación y violencia en el hogar no fueron denunciados por temor a más violencia, represalias y estigma social. Según el nuevo Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia doméstica.

Los tribunales de familia atienden los casos de violencia doméstica y sancionan a los culpables con multas de hasta 556.680 pesos (US \$795). Otras sanciones incluyen el desalojo del perpetrador de la residencia compartida con la víctima, órdenes inhibitorias, confiscación de armas de fuego y asistencia psicológica por orden judicial. Los casos habituales de abuso físico y psicológico en los que hay lesiones físicas se enjuician en el sistema de justicia penal. Las sanciones se basan en la gravedad de las lesiones y van de 61 a 540 días de prisión.

El gobierno continuó su campaña contra la violencia doméstica y en particular, concentró las actividades de difusión a través de los medios sociales. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por medio del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), dirigió los centros de la mujer, los cuales ofrecieron asistencia jurídica y de salud mental y refugios para mujeres. El Ministerio de Justicia y la PDI también mantuvieron en operación varias oficinas destinadas específicamente a proporcionar asesoramiento y asistencia en los casos de violación. SERNAM se asoció con algunas ONGs para impartir sesiones de capacitación a oficiales de la policía y autoridades judiciales y municipales sobre los aspectos jurídicos y psicológicos de la violencia doméstica. La organización también siguió gestionando una línea directa telefónica con servicio las 24 horas para los sobrevivientes de la violencia, incluidos el maltrato en el hogar y la violación.

Acoso sexual: El acoso sexual no es un delito penal, pero está clasificado como delito menor y las sanciones que conlleva se describen exclusivamente en el Código del Trabajo (véase la sección 7.d).

Derechos reproductivos: Las parejas y las personas tienen el derecho a decidir el número, espaciamiento y momento del nacimiento de sus hijos; de controlar su salud reproductiva; y de recibir la información y los medios necesarios para hacerlo sin discriminación, coacción ni violencia. El acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva fue limitado en las regiones remotas, lo cual afectó especialmente a las mujeres de escasos recursos. Durante el año, el Congreso aprobó una ley que permite la venta de anticoncepción de emergencia sin receta en las farmacias.

Discriminación: Las mujeres poseen la mayoría de los derechos legales que tienen los hombres; sin embargo, persistió la discriminación en el empleo, el salario, la propiedad y administración de negocios y la educación. No se supo de informes de discriminación en relación con el crédito o a la vivienda. La opción más común de régimen matrimonial es la sociedad conyugal, la cual otorga al esposo el derecho de administrar bienes conjuntos, incluidos los bienes de su esposa. En consecuencia, las mujeres que contraen matrimonio según el régimen de sociedad conyugal necesitan autorización del esposo para solicitar subsidios de vivienda y obtener préstamos o hipotecas, mientras que los hombres tienen acceso sin restricciones a estos y otros servicios. Años después del acuerdo celebrado en 2007 con la CIDH, siguió pendiente la legislación para modificar la ley sobre la sociedad conyugal con el fin de otorgar a mujeres y hombres la igualdad de derechos y obligaciones en el matrimonio. El Código de Comercio dispone que, a menos que esté casada conforme al régimen de separación de bienes, una mujer no puede celebrar un acuerdo de sociedad comercial sin el permiso de su esposo, mientras que el marido sí puede hacerlo sin el permiso de su esposa.

Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a pesar de que la ley establece la igualdad de remuneración por igualdad de trabajo, el ingreso anual promedio de la mujer fue el 32% inferior al del hombre. El ministerio tiene a su cargo la protección de los derechos legales de las mujeres y es la única entidad del gobierno que se ocupa concretamente de la discriminación contra ellas. En todo el país, los centros de la mujer contribuyeron a establecer la igualdad de derechos de las mujeres ofreciendo servicios como capacitación, asesoramiento y asistencia jurídica.

El 8 de marzo, la presidenta Bachelet promulgó una ley para crear el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a nivel de gabinete. SERNAM dejó de depender del Ministerio de Desarrollo Social para operar bajo el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, una transición que, según el programa, debía completarse en marzo de 2016. Además, se encargó al nuevo ministerio el establecimiento de oficinas regionales para promover su misión de igualdad de género en todas las regiones del país para marzo de 2016.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el territorio nacional, y a través de padres o abuelos. Los nacimientos se registran inmediatamente.

Maltrato de menores: La violencia doméstica, incluida la violencia contra los menores, siguió siendo un problema persistente. Las oficinas regionales del Servicio Nacional de Menores (SENAME) organizaron campañas en todo el país para combatir el maltrato de menores y las peores formas de trabajo infantil.

SENAME informó que, entre enero y agosto, se presentaron cargos en casi 10.000 casos de abuso sexual de menores de 18 años de edad. La ley impide permanentemente que las personas condenadas por abuso sexual de menores tengan derecho a puestos, empleos, oficios o profesiones en el ámbito educativo que hagan necesario el contacto directo y habitual con menores de 18 años. Asimismo, la ley incluye un registro público de esos autores de delitos sexuales.

Matrimonio forzoso y a edad temprana: La edad mínima legal para contraer matrimonio es 18 años (16 con el consentimiento de los padres).

Explotación sexual de menores: La explotación sexual de menores y adolescentes con fines comerciales fue un problema y, en el caso de los menores, la explotación fue por medio de prostitución con o sin intervención de terceros. Las sanciones por explotación sexual comercial son de tres a cinco años de prisión. No obstante, la mayoría de los tratantes condenados en 2014 fueron puestos en libertad condicional o recibieron sentencias condicionales según lo permiten las directrices para la imposición de condenas de menos de cinco años de prisión. En los casos de explotación habitual, o si hubo engaño o abuso de autoridad o confianza, estas penas aumentan de 5 años y 1 día a 20 años, con una multa de 31 a 35 UTM (de US \$2.015 a US \$2.275). (La unidad tributaria mensual, o UTM, es una unidad monetaria definida legalmente que se indexa según la inflación y equivale a US \$65).

Según las circunstancias, las relaciones sexuales heterosexuales con adolescentes entre los 14 y los 18 años de edad se pueden considerar estupro. La relación sexual con un menor de 14 años de edad se considera violación, independientemente del sexo o el consentimiento de la víctima. Las sanciones por estupro varían de 5 a 20 años de prisión. La pornografía infantil es un delito. Las sanciones por producir pornografía infantil van de 541 días a 5 años de prisión.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptado en La Haya en 1980. Para obtener más información, véase el informe del Departamento de Estado sobre cumplimiento en travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html e información

específica de cada país en travel.state.gov/content/childabduction/en/country/chile.html.

Antisemitismo

La comunidad judía ascendió a unas 20.500 personas, y hubo informes de amenazas a través de los medios sociales, así como de actos de vandalismo (grafiti) en los edificios de esta comunidad. Al parecer, el motivo de muchos de los comentarios en los medios sociales y los grafitis fue el desacuerdo con las políticas del Estado de Israel. Las autoridades gubernamentales respondieron de inmediato a estas inquietudes de la comunidad y emitieron declaraciones para denunciar el antisemitismo.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe discriminar a personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales en el empleo, la educación, el transporte aéreo y demás formas de transporte, el acceso a la atención de salud y la prestación de otros servicios estatales, y el gobierno hizo cumplir efectivamente estas disposiciones. No obstante, las personas con discapacidades sufrieron formas de discriminación de hecho (véase también la sección 7.d.). La ley estipula el acceso universal e igual a edificios, información y comunicaciones. La mayoría de los edificios públicos no cumplieron con los mandatos legales de accesibilidad. El sistema de transporte público, especialmente fuera de Santiago, no proporcionó acceso adecuado a las personas con discapacidades. Sin embargo, en los últimos años, TranSantiago, el sistema principal de transporte público dentro de Santiago, instituyó cambios para mejorar el cumplimiento con la ley, entre otros, sistemas de rampas y ascensores nuevos en algunas estaciones del metro, y mejor acceso a algunos autobuses. No obstante, muchas estaciones del metro y la mayoría de los autobuses siguieron siendo inaccesibles para personas con discapacidad física.

El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) informó que niños con discapacidades asistieron a la escuela (primaria y secundaria), pero que hubo dificultades para garantizar a estos niños el acceso igualitario a la escolaridad en instituciones privadas. También informó que las personas con discapacidades

tuvieron menos oportunidades de seguir estudiando después de la escuela secundaria.

El SENADIS funciona bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de proteger los derechos de las personas con discapacidades y defiende y promueve las políticas de integración y protección en todas las dependencias gubernamentales.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

La Constitución promueve de manera explícita el trato equitativo y la no discriminación, y el Código del Trabajo prohíbe específicamente la discriminación. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, publicada por el INDH en 2013, el 5,8% de la población encuestada sufrió discriminación debido al color de la piel. En 2014, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó la primera encuesta de su tipo de los afrodescendientes en Chile (ENCAFRO), dirigida a la región norte donde viven la mayoría de los afrodescendientes. La encuesta reveló que, en comparación con el promedio regional, los afrodescendientes completan menos años de escolaridad formal y tienen menos participación en la fuerza de trabajo. En su informe de 2014, el INDH recomendó más visibilidad de la raza en la formulación de políticas públicas y mayor reconocimiento de los afrodescendientes como medidas para combatir la discriminación de hecho en la educación y el empleo.

Asimismo, en su informe de 2013, el INDH indicó que los inmigrantes, los de color en particular, afrontan obstáculos mayores en el acceso a la atención de salud. En enero, el Ministerio de Salud aprobó un programa de acceso a la atención de salud a personas inmigrantes, el cual garantiza el acceso a atención médica pública y gratuita para todos los servicios de emergencia y los servicios para menores y mujeres embarazadas, independientemente de su situación de inmigrante. El informe anual sobre derechos humanos de 2015 de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales indicó que, hasta octubre, el programa no había sido implementado en su totalidad a nivel nacional.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas (cerca del 5% de la población total) tienen el derecho de participar en las decisiones que afecten a sus tierras, culturas y tradiciones, así como a la explotación de energía, minerales, madera y otros recursos naturales en sus propias tierras. El 80% de la población indígena pertenece al pueblo mapuche.

El 18 de marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y derechos humanos instó al gobierno a intensificar la labor para solucionar la exclusión, marginalización y discriminación de sus pueblos indígenas. Estos pueblos sufrieron discriminación social y en el empleo (véase también la sección 7.d.), y hubo informes de incidentes en los que fueron atacados y acosados. Las mujeres indígenas se enfrentaron a discriminación por motivo de su sexo, origen indígena y situación económica precaria, y fueron especialmente vulnerables a la violencia, la pobreza y la enfermedad. La Constitución no protege específicamente a los grupos indígenas.

Las protestas de los grupos indígenas por los derechos a la tierra continuaron todo el año, en especial, en la región de La Araucanía, una de las más pobres y donde un tercio de la población se autoidentifica como perteneciente al grupo indígena mapuche. En ocasiones, las protestas por los derechos a la tierra incluyeron acciones violentas, como la destrucción de camiones y equipo agrícola. Las acciones dirigidas a causar daños a la propiedad generaron más protestas de los agricultores y camioneros por lo que se consideró falta de orden público. En agosto, los camioneros pertenecientes a la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile condujeron en una caravana de varios cientos de kilómetros desde la región de La Araucanía hasta la capital para protestar, según afirmaban, contra la impunidad por los actos incendiarios que estaban destruyendo camiones de propiedad privada como parte de las protestas políticas sobre los derechos a la tierra. Al recibir a los manifestantes, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, reconoció que hubo impunidad en muchos de los atentados incendiarios en la región. En octubre, el gobierno anunció la creación de una unidad especial de Carabineros y asignó fiscales para mantener el orden público en la región de La Araucanía.

Hubo denuncias de abusos de la policía contra personas y comunidades mapuches, incluidos menores de edad. El INDH presentó peticiones para proteger los derechos constitucionales de los mapuches, incluidos niños, niñas y adolescentes, en los casos de uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad. La ONG Observatorio Ciudadano denunció además que la policía llevó a cabo registros de viviendas mapuches sin una orden judicial, detuvo y puso en libertad a mapuches sin audiencias de control de detención y utilizó la intimidación e hizo declaraciones discriminatorias contra ellos, incluyendo a menores de edad.

El 4 de febrero, la Corte de Apelaciones de Temuco concedió una petición del INDH para proteger a tres adolescentes de la comunidad de Coñomil Epuleo, por haber sido detenidos ilegalmente y golpeados por Carabineros en octubre de 2014.

La Corte remitió el caso al Ministerio Público para que realizara la investigación penal.

Hubo explotación de energía, minerales y madera cerca de las comunidades indígenas, así como proyectos mineros en las regiones del norte (donde viven las poblaciones indígenas aimaras, atacameños, quechuas, collas y diaguitas), y explotación maderera en el sur (donde viven los mapuches). Las tierras indígenas están demarcadas, pero algunas comunidades mapuches exigieron la restitución de tierras tradicionales de propiedad privada y pública. Las comunidades indígenas emprendieron acciones judiciales contra los proyectos mineros en el norte debido a la posible contaminación del suministro de agua y del medio ambiente, y al impacto de la demanda por agua en las zonas desérticas sobre la agricultura de subsistencia. Las poblaciones indígenas también expresaron inquietud debido a que las plantaciones madereras del sur podían afectar de forma negativa el nivel freático debido a la introducción de especies no nativas y la posible contaminación de las zonas costeras ocasionada por la producción de celulosa. A pesar de que los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en las decisiones que afectan a sus tierras, culturas y tradiciones, la organización Observatorio Ciudadano informó que estos grupos se enfrentaron a grandes obstáculos al ejercer sus derechos civiles y políticos.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos motivados por la orientación sexual y la identidad de género

La ley no penaliza la actividad sexual consensual entre adultos del mismo sexo, pero estipula que la edad de consentimiento para la actividad sexual homosexual es de 18 años. La actividad heterosexual se permite, en ciertas circunstancias, a la edad de 14 años. Existen leyes antidiscriminatorias que prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En febrero, la ONG Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó que, durante 2014, dio seguimiento a 237 casos de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Continuó la violencia contra las personas LGBTI. En 2014, cinco personas LGBTI fueron asesinadas por agresores que, supuestamente, se refirieron de manera directa a la sexualidad de las víctimas durante la agresión. Al final del año, todos los casos seguían bajo investigación, y ninguno había sido llevado a juicio.

Las autoridades del orden se mostraron renuentes a aplicar todo el peso de la ley de 2012 contra la discriminación, y a acusar a los agresores de víctimas LGBTI de delitos motivados por el odio, lo cual elevaría las sanciones penales según lo permitido por la ley.

Las leyes impiden que las personas transgénero cambien sus indicadores de sexo en documentos de identidad emitidos por el gobierno, incluyendo las tarjetas de identidad nacional y diplomas universitarios, para hacerlos coincidir con su aspecto exterior o expresión elegida.

En abril, la Presidenta Bachelet promulgó una ley para reconocer las uniones civiles de personas LGBTI. Esta medida, que entró en vigor el 22 de octubre, amplía las protecciones legales e incluye los derechos sucesorios y los beneficios de salud y jubilación.

Durante el año, los organismos del gobierno y aplicación de la ley, entre ellas, Gendarmería, Carabineros, la PDI y el Registro Civil participaron en talleres sobre no discriminación y sensibilidad a las cuestiones de género para mejorar los servicios prestados a ciudadanos LGBTI.

Estigma social del VIH y el sida

La ley prohíbe discriminar a una persona por su estado serológico respecto al VIH y dispone que ni las instituciones de salud públicas ni las privadas pueden negar a ninguna persona el acceso a servicios de atención a la salud a causa de ese estado. En 2012, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por las Naciones Unidas, informó que las mujeres seropositivas recibieron un trato de atención a la salud discriminatorio, especialmente en los servicios de salud reproductiva. Algunos problemas fueron demoras en la atención, maltratos verbales, presiones para que no tuvieran hijos y denegación del tratamiento. Las mujeres en particular se enfrentaron también a obstáculos considerables para prevenir la infección del VIH debido a conocimientos limitados de los servicios de salud pública, falta de educación y violencia de género.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

Con algunas limitaciones, la ley establece los derechos de los trabajadores a constituir sindicatos independientes y afiliarse al que elijan, a negociar colectivamente y a declararse en huelga. La ley también prohíbe las prácticas antisindicales y exige la indemnización o la reincorporación de trabajadores despedidos por su actividad sindical.

Se prohíbe la afiliación sindical al personal policial y militar, así como a los empleados civiles que pertenecen a la judicatura. Los dirigentes sindicales no pueden pertenecer a ningún partido político, y la Dirección del Trabajo tiene amplias facultades para vigilar las cuentas y transacciones financieras de los sindicatos. La ley prohíbe que los empleados públicos se declaren en huelga. Los empleados del sector privado tienen el derecho de declararse en huelga; sin embargo, la ley impone algunas restricciones a este derecho, por ejemplo, las huelgas deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los trabajadores. Están prohibidas las huelgas de los trabajadores agrícolas durante la temporada de la cosecha. También están prohibidas las huelgas de los empleados de 101 empresas del sector privado, en su mayoría, proveedoras de servicios tales como el suministro de agua y electricidad, y se estipula el arbitraje obligatorio para solucionar conflictos en esas empresas. La ley no prohíbe específicamente a los empleadores despedir a los empleados que se declaran en huelga, pero el empleador debe justificar el motivo y pagar indemnización si despide a los huelguistas.

La ley establece los derechos de negociación colectiva solo a nivel de empresa. A los sindicatos interempresariales se les permite negociar colectivamente solo cuando todos los empleadores estén de acuerdo a negociar en esos términos. La ley no prevé los derechos de negociación colectiva de los trabajadores en las instituciones públicas ni en las instituciones privadas cuyo presupuesto depende del Ministerio de Defensa. Tampoco prevé la negociación colectiva en las empresas donde está prohibido que los empleados se declaren en huelga, como es el caso del sector de atención a la salud, las autoridades del orden y los servicios públicos. Asimismo, la ley no garantiza los derechos de negociación colectiva a los trabajadores temporales o a quienes son empleados exclusivamente para tareas específicas, como la agricultura, la construcción, los puertos o el sector de las artes y el entretenimiento. La negociación colectiva en estos sectores siguió dependiendo de que los empleadores estuvieran dispuestos a ello.

En general, el gobierno hizo cumplir las leyes con efectividad. No obstante, la Dirección del Trabajo, que depende del Ministerio del Trabajo, comentó sobre la

necesidad de tener más inspectores y señaló que las sanciones económicas no siempre evitaron que las empresas reincidieran en la infracción. Por lo general, las empresas quedan sujetas a sanciones por infringir el Código del Trabajo. Las sanciones van de 1 a 10 UTM (de US \$65 a US \$650) para las microempresas y las pequeñas empresas, de 2 a 40 UTM (de US \$130 a US \$2.600) para las medianas empresas y de 3 a 60 UTM (de US \$195 a US \$3.900) para las grandes empresas, según la gravedad de cada caso. Es posible imponer “sanciones especiales” a las empresas por infracciones como las prácticas antisindicales. Las ONG informaron que los casos en los tribunales laborales tuvieron una duración aproximada de tres meses. A menudo, los casos relacionados con los derechos fundamentales de los trabajadores duraron casi seis meses. Las ONG informaron también que fue difícil para los jueces hacer cumplir las decisiones en favor de los trabajadores por motivos diversos, entre otros, cuando los activos de la empresa estaban bajo otro nombre o no era posible localizar a la entidad jurídica.

Por lo general, se respetó la libertad de asociación. En ocasiones, los empleadores no respetaron el derecho a la negociación colectiva. A pesar de que la ley las prohíbe, hubo huelgas en el sector público y de atención a la salud durante el año. En noviembre, los empleados del finalizaron una huelga de 39 días de duración después de que el gobierno aceptara el 10% de aumento en la escala salarial y una bonificación hasta final de 2017. No hubo represalias contra los trabajadores debido a la huelga. Según la organización Freedom House y la Confederación Sindical Internacional, continuaron las prácticas antisindicales. La ley permitió la sustitución de los trabajadores que estaban en huelga. Tanto las ONG como los sindicatos informaron que las empresas también hicieron uso de subcontratos y contratos temporales, y obtuvieron varios números de registro o identificación tributaria como forma de discriminación antisindical y con el fin de aumentar el tamaño de la fuerza laboral sin conceder derechos de negociación colectiva.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. En general, el gobierno hizo cumplir eficazmente las leyes aplicables. Las sanciones de 5 a 15 años de prisión impuestas por las infracciones fueron suficientemente severas para disuadirlas. Las ONG informaron que muchas de las autoridades gubernamentales responsables de identificar y asistir a las víctimas de la trata de personas contaron con experiencia y recursos limitados para ello, en especial, en los casos de trabajo forzoso.

Continuaron los casos de trabajo forzoso, entre otros, de extranjeros, hombres, mujeres y niños en las minas, la agricultura, el servicio doméstico y el sector de la hospitalidad. Algunos menores fueron obligados a trabajar en el narcotráfico (véase la sección 7.c.).

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley establece que la edad mínima para trabajar es de 18 años, aunque los menores entre 15 y 18 años de edad pueden hacerlo con el permiso expreso de sus padres o tutores, siempre que asistan a la escuela. Los menores pueden realizar solo tareas ligeras que no exijan gran esfuerzo físico ni constituyan una amenaza para su salud o desarrollo. Mientras asistan a la escuela, los menores no pueden trabajar más de 30 horas a la semana y, en ningún caso, más de ocho horas diarias ni en horarios entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Los empleadores deben registrar sus contratos laborales en la oficina local del inspector del trabajo del Ministerio del Trabajo.

Los inspectores del Ministerio del Trabajo hicieron cumplir los reglamentos eficazmente en la economía formal, pero no llevaron a cabo inspecciones ni exigieron el cumplimiento de dichos reglamentos en la economía informal. Por lo general, las sanciones y las inspecciones no se consideraron suficientes para disuadir las graves infracciones que ocurrieron, en su mayoría, de manera clandestina o en la economía informal.

El gobierno dedicó recursos y supervisión considerables a las políticas de trabajo infantil. SENAME, junto con las ONG acreditadas, dirigió programas en todo el país para proteger a los menores que viven en situaciones vulnerables. En coordinación con los inspectores del trabajo, SENAME identificó y asistió a los menores que se encontraban en situaciones de maltrato o peligro. Asimismo, siguió trabajando con organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros ministerios, para impartir cursos de capacitación a fin de reconocer y prevenir las peores formas de trabajo infantil. SENAME también llevó a cabo programas de educación pública con el fin de concientizar a la población y colaboró con la OIT para implementar programas de rehabilitación para los menores retirados del trabajo infantil.

El gobierno adoptó una nueva estrategia nacional para erradicar el trabajo infantil y proteger a los trabajadores adolescentes. Las entidades gubernamentales multisectoriales siguieron participando en el Comité Asesor Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. El comité se reunió periódicamente durante el año y congregó a organizaciones de la sociedad civil y dependencias gubernamentales en un intento coordinado para sensibilizar, prestar servicios a las víctimas y proteger sus derechos. La Mesa Técnica Intersectorial de las Peores Formas de Trabajo Infantil, una entidad distinta, mantuvo un registro de casos y elaboró un protocolo multisectorial para la detección, registro y atención de niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual con fines comerciales. Durante el año, SENAME trabajó con el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) para incluir normas estrictas en los procedimientos de certificación de hoteles a fin de prevenir la explotación sexual comercial de menores. Esto incluyó capacitación especial para el personal del SERNATUR encargado de la evaluación y certificación de los hoteles.

El trabajo infantil siguió siendo un problema en la economía informal y en la agricultura, principalmente, en las zonas rurales. El mayor número de infracciones se concentró en los sectores de la construcción, la manufactura industrial, hotelería y restaurantes y la agricultura. Las infracciones cometidas incluyeron la contratación de un menor de 18 años sin la autorización de su representante legal, el incumplimiento con el registro del contrato de un menor en el ministerio y la contratación de un menor de 15 años para actividades no permitidas por la ley.

La explotación sexual de menores con fines comerciales siguió siendo un problema (véase Menores de Edad en la sección 6). Los menores trabajaron en la producción de artículos de cerámica y libros y en la reparación de calzado y prendas de vestir. En las zonas urbanas, fue frecuente ver a niños portando cargamentos de productos agrícolas en los andenes de carga y ayudando en actividades de la construcción. A su vez, las niñas trabajaron vendiendo mercancías en las calles y en el servicio doméstico. En las zonas rurales, los menores se dedicaron al cuidado de animales de granja, así como a la cosecha, recolección y venta de cultivos, como el trigo. También siguió siendo un problema el uso de niños en la producción, venta y transporte de drogas en las zonas fronterizas con Perú y Bolivia.

Véase también el informe del Departamento del Trabajo acerca de las *Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil* en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. Discriminación en el empleo o la ocupación

La ley y los reglamentos prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, discapacidad, idioma, orientación sexual o identidad de género, infección de VIH u otras enfermedades transmisibles o condición social. La ley también dispone recursos civiles para las víctimas de discriminación en el empleo por motivos de raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, afiliación o no afiliación a organizaciones sindicales, o bien participación o no participación en esas organizaciones, sexo, orientación sexual, identificación de género, estado civil, edad, afiliación, aspecto personal y enfermedad o discapacidad física.

Según la ley, el acoso sexual es motivo de despido inmediato del lugar de trabajo. Los empleadores están obligados por ley a establecer procedimientos internos para investigar el acoso sexual, y pueden ser sancionados con el pago de multas y otras compensaciones económicas a las víctimas si no se cumplen con esos procedimientos. La ley dispone la protección de las personas víctimas de acoso sexual de empleadores y colegas. También estipula el pago de una indemnización a las víctimas que renuncian a causa del acoso sexual, siempre que hayan trabajado al menos un año completo con ese empleador.

El gobierno hizo cumplir eficazmente las leyes y los reglamentos que prohíben la discriminación en el empleo. Por lo general, las autoridades hicieron cumplir la ley en los casos de acoso sexual, y no se comprobó que la policía o las autoridades judiciales rehusaran actuar. Es posible imponer “sanciones especiales” a las empresas por infracciones como denegar un permiso de maternidad. Las penas establecidas fueron generalmente suficientes para disuadir esas infracciones.

No obstante, siguió habiendo discriminación en el empleo y la ocupación. A menudo, las personas con discapacidades afrontaron discriminación en la contratación y constituyeron cerca del 7,6% de la población en edad de trabajar, pero solo el 0,5% de la fuerza laboral. Las poblaciones indígenas sufrieron discriminación social en el empleo.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El salario mínimo en el país fue de 241.000 pesos (US \$345) mensuales para todas las ocupaciones, incluido el servicio doméstico. El salario mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años y menores de 18 años fue de 179.912

pesos (US \$260). El nivel oficial de pobreza en 2013, año de los últimos datos disponibles, fue de 91.274 pesos (US \$130) mensuales.

La ley fija la semana laboral legal en 6 días o 45 horas. La duración máxima de la jornada de trabajo es de 10 horas (que incluye el pago de dos horas extras), pero algunas categorías de trabajadores, como gerentes, administradores, empleados de embarcaciones pesqueras, restaurantes, clubes y hoteles, conductores, tripulaciones de aeronaves, teletrabajadores o empleados que trabajan fuera de la oficina y deportistas profesionales, están exentos de las restricciones aplicadas a las horas de trabajo. La ley exige un período de descanso mínimo de 24 horas durante la semana laboral, salvo para quienes trabajan a grandes alturas, quienes pueden cambiar el día libre cada semana por varios días libres consecutivos cada dos semanas. El permiso anual para los trabajadores de tiempo completo es de 15 días laborales, y los trabajadores con más de 10 años de servicio tienen derecho a un día más de permiso anual por cada tres años trabajados. Se consideran horas extras todo tiempo trabajado que exceda la semana laboral de 45 horas, y se debe pagar a los trabajadores 1,5 veces el valor de la hora semanal por cada hora extra trabajada.

La ley establece normas de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son aplicables a todos los sectores. Existen normas de seguridad y salud especiales para sectores particulares, como la minería y el buceo. El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) se encarga también de regular e inspeccionar la industria minera. La ley no regula el sector informal. Por ley, los trabajadores pueden apartarse de situaciones que pongan en peligro su salud o su seguridad sin riesgo alguno para su empleo, y las autoridades protegieron efectivamente a los empleados que se encontraban en esta situación.

La Dirección del Trabajo, subordinada al Ministerio del Trabajo, tiene la responsabilidad de hacer cumplir el salario mínimo y demás leyes y reglamentos laborales, y así lo hizo con eficacia en la economía formal. Los Ministerios de Salud y del Trabajo administraron e hicieron cumplir de manera eficaz las normas de seguridad y salud. La ley establece la imposición de multas por incumplimiento de los reglamentos laborales, así como multas a los empleadores que impongan a los trabajadores jornadas de más de 10 horas al día o que no les concedan días de descanso suficientes. Por lo general, las empresas quedan sujetas a sanciones por infringir el Código del Trabajo. Las sanciones van de 1 a 10 UTM (de US \$65 a US \$650) para las microempresas y las pequeñas empresas, de 2 a 40 UTM (de US \$130 a US \$2.600) para las medianas empresas y de 3 a 60 UTM (de US \$195 a US \$3.900) para las grandes empresas, según la gravedad de cada caso. Es

posible imponer “sanciones especiales” a las empresas por infracciones como causar lesiones irreversibles a un empleado. Los trabajadores en la economía informal no tuvieron protección efectiva en lo que se refiere a salarios o seguridad. Los fondos de inversión de seguros son instituciones privadas sin fines de lucro que reciben una comisión del gobierno para ofrecer compensación a los trabajadores e impartir capacitación a los sectores público y privado sobre seguridad ocupacional.

La Dirección del Trabajo empleó a unos 720 inspectores laborales durante el año. Tanto la Dirección del Trabajo como las ONG informaron de la necesidad de contar con más inspectores para hacer cumplir las leyes laborales en todo el país, en especial, en las zonas distantes. Las ONG comentaron que los inspectores y los jueces de los tribunales laborales necesitaban más capacitación y que la falta de información y medios económicos generó una desigualdad entre las partes en los casos presentados ante los tribunales. Se consideró que las multas no tuvieron efecto disuasorio en los grandes empleadores. La Dirección del Trabajo colaboró de manera preventiva con las pequeñas y medianas empresas para ayudarlas a cumplir las leyes laborales.

Las infracciones relacionadas con el salario mínimo fueron más frecuentes en los sectores inmobiliarios y comerciales. Al mes de agosto, los sectores con el mayor número de infracciones de las normas de salud y seguridad fueron la construcción, el comercio minorista, la fabricación industrial y el comercio. El sector con el mayor número de accidentes durante el año fue el de servicios. Los trabajadores inmigrantes del sector agrícola fueron el grupo con mayor probabilidad de ser sometidos a condiciones de explotación en el trabajo.